

II.- LA CORTE SUPREMA.

Santiago, 26 de marzo de 2002.

Proveyendo el escrito de fojas 150, téngase presente.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de seis de marzo en curso, escrita a fojas 120.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo Yurac S., Humberto Espejo Z., y Nibaldo Segura P.

Rol N° 901-2002.

**3.- INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RECHAZADO. Disposición del D.L. N° 2.695 no son inconstitucionales. Hay dos votos disidentes**

**Doctrina**

*El decreto ley N° 2.695 contiene un conjunto armónico de disposiciones especiales encaminadas a regularizar, a sanear el dominio de la pequeña propiedad raíz, con el propósito como se expresa en la exposición de motivos de ese cuerpo legal: "De regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos", añadiendo: "que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándose a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de sus poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos por la ley, y que contemple la intervención de la justicia originaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de los terceros";*

*El mencionado decreto ley N° 2.695, como puede advertirse, se orienta a regir situaciones especiales, respecto de las cuales no cabe aplicar las disposiciones ordinarias de la legislación civil, en particular las que comprenden la denominada "Teoría de la posesión inscrita", que postula que la inscripción de un inmueble constituye garantía, requisito y prueba de la posesión, conforme a lo que fluye de los artículos 686, 696, 702, 724, 728, 730 inciso final, 924 y 2505 del Código Civil, disposiciones que por cierto no están revestidas de rango constitucional. de modo que nada impide al legislador modificarlas o apartarse de ellas en situaciones especiales, creando un estatuto de normas de aplicación particular por razones de interés público general, como acontece con el indicado cuerpo legal;*

✓ Santiago, 25 de marzo de 2002.

Vistos:

Don Francisco Pérez Álvarez, comerciante, domiciliado en esta ciudad, calle Jorge

Sexto N° 111, comuna de Las Condes, solicita que se declare que en el juicio seguido ante el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, caratulados "Pérez de Arce Francisco con Hernández Figueroa Ángela", número de Rol N° 2.497-2000, son inaplicables

las norm  
incisos 1  
17, 22 in  
N° 2.695  
artículo  
Política  
la Secre  
Naciona  
señores  
se inscri  
las regla  
de su p  
calle En  
Normal,  
oposició  
ción del  
que las c  
violan la  
consagi  
Carta Fi  
bre pos  
Código  
posesió  
nio, que  
nizació  
cluye a  
cidos e  
blica, c  
los pre  
context  
mente  
deració  
va, baj  
o conc  
siglo h  
piedac  
embar  
puede  
vo y a  
Solicit  
recurs  
do, so  
decre  
dispor  
titució

A  
aboga  
roa y  
cuanc

ase con su agrega-

Ministros señores  
do Álvarez H., Do-  
erto Espejo Z., y

## oposición del D.L.

res especiales  
lad raíz, con el  
pro legal: "De  
que los tiene  
o ha permitido  
adecuándose  
facultades a la  
nombre de sus  
ey, y que con-  
tima oposición

a a regir situa-  
ciones ordina-  
ada "Teoría de  
stituye garan-  
artículos 686,  
osiciones que  
ada impide al  
s, creando un  
blico general,

Las Condes, soli-  
el juicio seguido  
Juzgado Civil de  
rez de Arce Fran-  
eroa Ángela", nú-  
1, son inaplicables

las normas contenidas en los artículos 1º, 2º incisos 1º y 2º, 3º inciso 2º y 3º, 5º, 6º, 15, 16, 17, 22 incisos 3º y 4º, 24 y 25 del decreto ley N° 2.695, por conculcar lo que dispone el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República. Expresa, que ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, los señores Hernández Figueroa solicitaron que se inscribiera a nombre de ellos, conforme a las reglas del citado decreto ley, un inmueble de su propiedad, ubicado en esta ciudad, calle Entre Ríos N° 2184, comuna de Quinta Normal, deduciendo la respectiva solicitud de oposición, la que dio origen a la substanciación del proceso judicial indicado. Manifiesta que las disposiciones del decreto ley N° 2.695, violan la garantía constitucional que ha sido consagrada en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental y abrogan las normas sobre posesión y dominio establecidas en el Código Civil, suprimiendo la garantía de la posesión inscrita como presunción de dominio, que constituye la base de la actual organización social y económica del país. Concluye aseverando que los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, colisionan clara e inequívocamente con los preceptos del decreto ley citado, en su contexto general, pues, "mana irrefragablemente de las propias motivaciones o consideraciones de su dictación que, en definitiva, bajo la apariencia de un sistema paralelo o concomitante a aquél que por más de un siglo ha determinado el régimen de la propiedad sobre inmuebles, se ha creado, sin embargo, un sistema contrapuesto que no puede sino calificarse de oportunista, abusivo y arbitrario; en suma, inconstitucional". Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y se declare que, en el juicio indicado, son inaplicables las normas que cita del decreto ley N° 2.695, porque violan lo que dispone el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

A fojas 148, don Isaías Gómez Ganem, abogado, por doña Ángela Hernández Figueroa y don Ricardo Hernández Figueroa, evacuando, el traslado solicita que se rechace

el recurso, con costas, por cuanto tanto el Código Civil como el decreto ley en cuestión, tienen una misma jerarquía y, en consecuencia, no hay inconstitucionalidad en que una ley especial abrogue una norma general. Señala que la inscripción es solamente presunción de dominio, pues el "título incontestable de propiedad" (según el Mensaje del Código Civil), se obtiene por la vía de la prescripción, sea ordinaria o extraordinaria. Así, el decreto ley ha establecido una prescripción adquisitiva especial que, como modo de adquirir, no es inconstitucional, pues la misma Carta Fundamental ha encargado al legislador establecer los modos de adquirir el dominio; razonamiento aplicable a este caso, pues la privación del dominio no se producirá por sentencia, sino por el transcurso del plazo de la prescripción adquisitiva. Por lo tanto "el saneamiento del título se remite, en definitiva, —según se afirma— a los modos generales de adquirir el dominio establecidos en el Código Civil". Termina señalando que no hay norma constitucional alguna, que impide se dicten disposiciones sobre adquisición por prescripción, lo que obviamente supone la pérdida del bien por su anterior propietario, más aún si, como en el presente caso, la tenencia de una cosa determinada, con ánimo de señor y dueño, se encuentra suficientemente determinada.

A fojas 155, el señor Fiscal Judicial es de opinión que el recurso debe ser desestimado. Señala que confrontado el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, con las normas del decreto ley N° 2.695, no se aprecia que exista contradicción, porque la disposición constitucional confiere al legislador la facultad de establecer los modos de adquirir el dominio. La gran limitación de los actos jurídicos tendentes a generar el dominio, a traspasarlo o a extinguirlo, está contenida en el derecho ajeno y en la propia ley. En la especie el decreto ley N° 2.695, de 1978 y la ley N° 19.455, en cuanto lo modifica, contienen precisamente un conjunto armónico de disposiciones especiales encaminadas a regularizar o sanear el dominio de la pequeña propiedad raíz, como la precisa la exposi-

ción de motivos que sirvieron de fundamento para ser dictado y que no son otros, que regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos, y ello porque "la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de sus poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos por la ley, y que contemple la intervención de la justicia ordinaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de los terceros." El referido decreto ley, está destinado a regir situaciones especiales y por lo tanto no cabe aplicar disposiciones ordinarias de la legislación civil, como son aquellas que contemplan los artículos 686, 696, 700, 723, 730, 924 y 2505 del Código Civil las que al no estar revestidas de rango constitucional permite que el legislador las modifique o cree, por razones de interés público, normativas diferentes en situaciones especiales. En consecuencia, no se aprecia que los preceptos legales impugnados conculquen la norma constitucional contenida en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sino que por el contrario, está acorde con ella, ya que como se dijo, en ella se entrega a la ley los modos de adquirir los bienes, sean corporales o incorporales.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º.- Que, como se indicó en la parte expositiva, la parte recurrente pretende que se declare que en el proceso civil incoado en el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, caratulado "Pérez de Arce, Francisco con Hernández Figueroa, Ángela", número de Rol 12.497-00, sobre oposición a solicitud de regularización, son inaplicables las normas contenidas en los artículos 1º, 2º incisos 1º y 2º, 3º incisos 2º y 3º, 5º, 6º, 15, 16, 17, 22 incisos

3º y 41, 24 y 25 del decreto ley N° 2.695, por considerar que son contrarios a la disposición establecida en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República;

2º.- Que la norma de rango superior que se estima contradicha por los diversos preceptos que se indican del decreto ley N° 2.695, es la del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales". "Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social". "Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental". "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador...";

3º.- Que, por su parte, los artículos del decreto ley N° 2.695 que se dicen contrarios a esta norma, establecen, en lo sustancial, lo siguiente:

el artículo 1º, que los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a ochocientas o a trescientas ochenta unidades tributarias, podrán solicitar de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley;

el artículo 2º, en sus incisos 1º, 2º y 3º, que para ejercer este derecho, el solicitante deberá, entre otros requisitos, "estar en posesión del inmueble, por sí o por otra perso-

na en su no  
siva, sin vic  
cinco años  
existe juicio  
se discuta  
ble iniciado  
presentación

el artículo  
ñala que e  
posesión la  
gal o mate  
forme parte  
sión, y que  
rente que t  
las posesio  
como título  
venta de p  
mejoras o  
inmueble,  
vado, y el t  
diente o t  
anterior. L  
acreditarse  
tismo y de  
tida de na  
del padre  
hecho de i  
trato de pr  
otros instr  
conste la  
no signifi  
dominio a

el artículo  
deberá ac  
prestada  
determine  
el requis  
título 2º,  
respecto  
hecho de  
conociera  
cimiento  
cripción  
la de otra  
rechos se

el artículo  
miento d

to ley N° 2.695, por rarios a la disposi- ículo 19 número 24 a de la República;

rango superior que r los diversos pre- lecreto ley N° 2.695, de la Constitución las las personas "el sus diversas espe- ienes corporales o puede establecer el edad, de usar, go- limitaciones y obli- su función social". xijan los intereses a seguridad nacio- tidad públicas y la io ambiental". "Na- , ser privado de su que recae o de al- acultades esencia- tud de la ley gene- e la expropiación blica o de interés legislador...";

, los artículos del e dicen contrarios , en lo sustancial,

poseedores mate- rales o urbanos, ago del impuesto ocientas o a tres- ributarias, podrán i Tierras y Bienes onozca la calidad e dichos bienes a para adquirir su le acuerdo con el iblece en la pre-

cisos 1º, 2º y 3º, ho, el solicitante os, "estar en po- o por otra perso-

na en su nombre, en forma continua y exclu- siva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos" y " acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmue- ble iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud;

el artículo 3º, en sus incisos 1º y 2º, se- ñala que el solicitante podrá agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta le- gal o material, siempre que el inmueble no forme parte de uno inscrito de mayor exten- sión, y que exista, a lo menos, un título apa- rente que haga presumible la continuidad de las posesiones; que se tendrá entre otros, como título aparente la promesa de compra- venta de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o pri- vado, y el hecho de ser el solicitante descen- diente o heredero presunto del poseedor anterior. La calidad de descendiente podrá acreditarse también con las partidas de bau- tismo y de matrimonio religioso o con la par- tida de nacimiento en que conste el nombre del padre o de la madre y, además, que el hecho de invocar como antecedente un con- trato de promesa de compraventa o cualquier otros instrumento público o privado en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el poseedor reconozca dominio ajeno;

el artículo 5º, establece que el solicitante deberá acompañar una declaración jurada, prestada ante el funcionario que el Servicio determine, acerca del hecho de cumplir con el requisito contemplado en el N° 1 del ar- tículo 2º, sobre el origen de su posesión y respecto de los antecedentes legales y de hecho de los poseedores anteriores, si los conociera, como, asimismo, sobre el cono- cimiento que tuviere de la existencia de ins- cripciones que se refieran al inmueble y de la de otras personas que pudieran tener de- rechos sobre el predio;

el artículo 6º, prescribe que el cumpli- miento del requisito de no existir juicio pen-

diente se acreditará mediante declaración jurada que deberá prestarse conjuntamente con la que exige el artículo anterior;

el artículo 15, establece que la resolu- ción del Servicio que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez prac- ticada la inscripción en el Registro del Con- servador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aun- que existiesen a favor de otras personas ins- cripciones que no hubieran sido canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno. La reso- lución indicada y la sentencia a que se refie- re el artículo 25 se inscribirán al margen de la respectiva inscripción de dominio a la que afecte el saneamiento, si se tuviere conoci- miento de ella;

el artículo 16, señala que como conse- cuencia de lo dispuesto en el artículo ante- rior, expirado el plazo de un año a que esa disposición se refiere, prescribirán las accio- nes emanadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servi- dumbres activas y el de hipotecas relativas al inmueble inscrito de acuerdo con la pre- sente ley. Agrega que las anteriores inscrip- ciones de dominio sobre el inmueble, así como la de los otros derechos reales men- cionados, las de los gravámenes y prohibi- ciones que lo afectaban, una vez transcurri- do el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por ello recobren su vigencia las ins- cripciones que antecedían a las que se can- celan;

el artículo 17, prescribe que los posee- dores de inmuebles inscritos con arreglo a esta ley no podrán gravarlos ni enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. Agrega que los Con- servadores de Bienes Raíces deberán ins- cribir de oficio la prohibición, la que quedará

cancelada, por el solo ministerio de la ley, una vez transcurrido el referido plazo de un año. Vencido este término, dichos funcionarios deberán alzarlas de oficio, sin necesidad de requerimiento de parte interesada;

el artículo 22, en sus incisos 3º y 4º, establece la forma en que se debe rendir la prueba en los juicios en que se formule una oposición a la solicitud de saneamiento, y la manera en que debe ser apreciada por el juez de la causa;

el artículo 24, establece que la sentencia que rechaza total o parcialmente la oposición, debe ordenar la inscripción a favor del peticionario, de la totalidad del inmueble o de la porción determinada del mismo respecto de la cual aquél haya acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 2. En el evento que el tribunal acepte la oposición deberá ordenar la inscripción a nombre del oponente en el caso en que procediera;

Por último, el artículo 25 prescribe que la sentencia judicial que ordene la inscripción será considerada como justo título, y la inscripción que se practique producirá los mismos efectos que se establece en el título III del decreto ley;

4º.- Que la norma constitucional mencionada, que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, también preceptúa que "sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social".;

5º.- Que el decreto ley Nº 2.695 contiene precisamente un conjunto armónico de disposiciones especiales encaminadas a regularizar a sanear el dominio de la pequeña propiedad raíz, con el propósito como se expresa en la exposición de motivos de ese cuerpo legal: "De regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que

los tiene imperfectos"; añadiendo: "que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de sus poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos por la ley, y que contemple la intervención de la justicia originaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de los terceros";

6º.- Que el mencionado decreto ley Nº 2.695, como puede advertirse, se orienta a regir situaciones especiales, respecto de las cuales no cabe aplicar las disposiciones ordinarias de la legislación civil, en particular las que comprenden la denominada "Teoría de la posesión inscrita", que postula que la inscripción de un inmueble constituye garantía, requisito y prueba de la posesión, conforme a lo que fluye de los artículos 686, 696, 702, 724, 728, 730 inciso final, 924 y 2505 del Código Civil, disposiciones que por cierto no están revestidas de rango constitucional, de modo que nada impide al legislador modificarlas o apartarse de ellas en situaciones especiales, creando un estatuto de normas de aplicación particular por razones de interés público general, como acontece con el indicado cuerpo legal;

7º.- Que, en efecto, en conformidad a la normativa especial establecida en el referido decreto ley Nº 2.695, para obtener el reconocimiento de poseedor regular y quedar en situación de sanear la propiedad del correspondiente inmueble y adquirir su dominio por la prescripción adquisitiva que regula, no constituye obstáculo la circunstancia de que existan inscripciones anteriores sobre el mismo inmueble;

8º.- Que, por lo demás, cabe resaltar que los preceptos del decreto ley Nº 2.695 que se reprochan de inconstitucionales no establecen una modalidad para adquirir el dominio que se aparte enteramente de las que

para la p  
Código C  
sesión m  
cinco añ  
gular, qu  
diente in  
nes Raíz  
para ad  
prescrip  
desde la

9º.-  
dad esp  
tos bien  
precept  
ción Po  
entrega  
modos  
nes cor  
sigue q  
constitu  
del dor  
modo c  
normat  
su adq

10.  
te com  
manife

Po  
a lo qu  
ción P  
do de  
Recur  
22 de  
de est  
fojas

Ac  
Minis  
les, qu  
te rec  
mento

1  
dente  
espe  
2.695  
pose

añadiendo: "que la e la materia no ha caz al problema, por odificarla, adecuán- y estableciendo un e dé facultades a la para ordenar la ins- nombre de sus po- reúnan los requisi- y, y que contemple ícia originaria sólo i oposición o para e los terceros";

nado decreto ley vertirse, se orienta iales, respecto de r las disposiciones i civil, en particular nominada "Teoría ue postula que la : constituye garan- la posesión, con- artículos 686, 696, final, 924 y 2505 ones que por cier- rango constitucio- ipide al legislador : ellas en situacio- n estatuto de nor- ar por razones de mo acontece con

conformidad a la :cida en el referi- ara obtener el re- regular y quedar ropiedad del co- idquirir su domi- isitiva que regu- la circunstancia s anteriores so-

abe resaltar que y N° 2.695 que onales no esta- idquirir el domi- nte de las que

para la prescripción adquisitiva contiene el Código Civil, puesto que, además de la posesión material del predio, de no menos de cinco años, se requiere también posesión regular, que se otorga mediante la correspondiente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, situación que, por ende, habilita para adquirir el dominio del inmueble por prescripción una vez transcurrido un año desde la fecha de aquella inscripción.

9°.- Que, en consecuencia, esta modalidad especial de adquirir el dominio de ciertos bienes raíces resulta acorde con lo que preceptúa el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en cuanto por dicha norma se entrega a la ley el establecimiento de los modos de adquirir la propiedad de los bienes corporales e incorporeales, de lo que se sigue que su aplicación no puede llegar a constituir una forma de despojo o privación del dominio, sino que, por el contrario, tal modo de adquirirlo está en armonía con la normativa legal y constitucional que faculta su adquisición.

10.- Que, atendido lo expuesto, esta Corte comparte la opinión del Ministerio Público manifestada en su dictamen de fojas 155.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo que dispone el artículo 80 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre substanciación del Recurso de Inaplicabilidad de las leyes de 22 de marzo de 1932, se rechaza el recurso de esta especie deducido en lo principal de fojas 126.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señor Rodríguez y señorita Morales, quienes estuvieron por acoger el presente recurso en virtud de los siguientes fundamentos:

1°) Que los preceptos resumidos precedentemente, que conforman esta legislación especial que se contiene en el decreto ley N° 2.695, no sólo abrogan las normas sobre posesión y dominio establecidas en el Códi-

go Civil, suprimiendo las garantías de la posesión inscrita que constituye presunción de dominio y que son la base de la actual organización social y económica del país, sino que contravienen el artículo 19 N° 24 de la Constitución, transcrito en lo pertinente en el considerando 4°, ya que permiten que el titular de un derecho de propiedad sobre un bien raíz legalmente inscrito a su favor sea privado de lo suyo sin expropiación previa y en beneficio de otro que sólo detenta su posesión material;

2°) Que la contradicción o pugna existente con la norma constitucional no sólo está patente en relación a los preceptos legales mencionados por el recurrente, sino que alcanza también al decreto ley N° 2.695 en su contexto general, en cuyas declaraciones preliminares que motivan su dictación, se dice que "se ha creado un sistema que la legislación ha denominado 'saneamiento del dominio de la pequeña propiedad', que tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos..." y "que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de los poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos en la ley, y que contemple la intervención de la Justicia Ordinaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de terceros"; de manera que, en su totalidad, el decreto ley crea un sistema tanto de carácter sustantivo como de índole procesal cuyos objetivos y efectos conducen inequívocamente a privar de su dominio, constitucionalmente garantizado, al titular de este derecho, sobre su propiedad debidamente inscrita.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Pronunciado por el Presidente Titular señor Mario Garrido M., y los Ministros se-

ñores Hernán Álvarez G., Marcos Libedinsky T., Eleodoro Ortiz S., José Benquis C., Enrique Tapia W., Ricardo Gálvez B., Alberto Chaigneau del C., Jorge Rodríguez A., Enrique Cury U., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Humberto Espejo Z., Jorge Medina C., Milton Juica A., Nibaldo Segura P., y se-

ñorita María Antonia Morales V. No firman los Ministros señores Ortiz, Tapia, Chaigneau y Segura, por encontrarse ausentes, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo.

Rol Nº 4.478-00.

#### 4.- ACCIÓN REIVINDICATORIA (su ejercicio por parte de herederos)

##### *Doctrina*

*El art. 1268 del C. Civil dispone que el heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros, y que no hayan sido prescritas por ellos.*

*Por su parte el art. 892 del mismo cuerpo legal estatuye que se puede reivindicar una cuota determinada de una cosa singular.*

*Una interpretación armónica de las disposiciones precitadas permite concluir que, para que prospere una acción de esta naturaleza, es menester que en el juicio se compruebe la cuota determinada que a cada uno de los herederos corresponde en la cosa singular.*

#### I.- FALLO DE 1º GRADO.

San Fernando, 28 de agosto de 2000.

Vistos:

Que a f.s. 14 comparecen Rojelia de las Mercedes Arias Ramírez, dueña de casa, domiciliada en calle Negrete Nº 438, San Fernando; Hilda Rosa Arias Ramírez, dueña de casa; Víctor Fernando Arias Ramírez, agricultor y María Elena Arias Ramírez, dueña de casa, domiciliados en Callejones Nancagua, interponiendo acción reivindicatoria en contra de Hugo del Carmen Arias González, se ignora oficio, domiciliado en Héroes de la Concepción, pasaje Monseñor Cornejo Nº 201, de Nancagua. Que fundando su demanda indican que los actores fueron excluidos por su hermano Lisaldo del

Carmen Arias Ramírez, padre del demandado Hugo del Carmen Arias González, de la posesión efectiva de sus padres legítimos, figurando en ella como único heredero sólo aquél, no obstante el conocimiento que tenía de la existencia de otros herederos. Que como resultado de lo anterior, Lisaldo del Carmen Arias Ramírez, efectuó la inscripción especial de herencia al solo nombre suyo, la cual consistía en un inmueble ubicado en Callejón de Nancagua, que comprendía una casa y un sitio. Que posteriormente, tal inmueble lo vendió a su hijo y demandado de autos Hugo del Carmen Arias González. Que en consecuencia, el comprador posee una cosa ajena, salvo la cuota que sí le correspondía al vendedor. Solicitando se tenga por interpuesta la Acción Reivindicatoria en contra del demandado para que restituya a las mismas personas las cuotas del inmueble